

# 8ª SESIÓN DE PRORROGA, DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1894

## PRESIDENCIA DEL DOCTOR ALCOBENDAS

SUMARIO: Asuntos entrados—Aprobación sobre tablas de las modificaciones introducidas por el honorable senado en el proyecto de ley de tarifas postales y telegráficas para 1895—Continúa la consideración en particular del proyecto de ley aprobando los códigos militares para el ejército y armada.

### *Diputados presentes:*

Abella, Acuña, Alcobendas, Almada, Alurralde, Alvarado, Alvarez, Amarilla, Amuchástegui, Avalos, Avellaneda, Ayarragaray, Balaguer, Barroetaveña, Berduc, Bermejo, del Campillo, Cantón, Carol, Castellanos (F.), Caretti, Chavarria, Claros, Daract, Demarchi, Ferrari, Frias, Gálvez, García (J. A.), García (L.), García (T.), Garzón, Gigena, Godoy, Gómez (F. M.), Gómez (L.), Gómez (J. R.), González (G.), Herrera, Ibáñez, Luque, Lloket, Mantilla, Martínez, Maurin, Mena, Obligado, Otaño, Pacheco, Paiera, Pérez, Pinto, Pizarro, Rodríguez Jurado, Ruiz, Saavedra Zavaleta, Soaje, Solari, Tejedor, Torres, Uballes, Ugarte, del Valle, Varela, Vila, Villamayor, Villanueva.

### *Ausente, con licencia:*

Guinazú, Grané, Onésida, Vieyra.

### *Ausente, con aviso:*

Cabal, González, (J. V.) Montier, Irigoyen, Ocampo.

### *Ausente, sin aviso:*

Castellanos (A.), Cortés Funes, Fernández, Figueroa Alcora, Peña, Tamayo.

En Buenos Aires, á 2 de noviembre de 1894, reunidos en la sala ordinaria de sesiones de la cámara los señores diputados arriba indicados, el señor presidente declara abierta la sesión, siendo las 3 p. m.

### ACTA

Se leyó y aprueba la de la sesión anterior.

### ASUNTOS ENTRADOS

### COMUNICACIONES OFICIALES

—El honorable senado remite, en revisión, un proyecto de ley acordando permiso á los señores Quesada hermanos para establecer una línea de tramways desde la capital federal á San Justo. (A la comisión de obras públicas.)

—El mismo remite, con modificaciones, el proyecto de ley sobre tarifas postales y telegráficas para el año de 1895.

### TARIFAS POSTALES Y TELEGRÁFICAS

**Sr. Rodríguez Jurado** — Las modificaciones introducidas por el honorable

senado son dos, muy insignificantes. Así es que haría moción para que se tratara sobre tablas este asunto.

—Se aprueba esta indicación.

**Sr. secretario Ovando** — La primera modificación consiste en alterar la redacción del artículo 17.

El proyecto de la cámara de diputados dice: «La dirección general de correos y telégrafos reglamentará la manera de percibir el franqueo que falte á la correspondencia depositada en los buzones, y ésta no será entregada á los destinatarios sino de acuerdo con las disposiciones de la ley de correos sobre esta clase de correspondencia.»

El honorable senado dice así: «El franqueo que falte á la correspondencia depositada en los buzones se cobrará á los destinatarios en sus domicilios, siempre que se haga la distribución en esta forma.

«Los reglamentos establecerán cómo han de ser distribuidas las cartas ó piezas cuyo franqueo no se ha pagado».

La segunda modificación consiste en agregar en el inciso 5º del artículo 26, después de las palabras «de provincia», las siguientes: «y de territorios federales».

**Sr. Rodríguez Jurado** — Pido la palabra.

La comisión de presupuesto entiende, señor presidente, que las modificaciones introducidas por el honorable senado se refieren á deficiencias de franqueo, no á la falta absoluta de él; porque, si fuese esto último, sería alterar por completo el procedimiento que se sigue en la actualidad. Pero como creo que se relaciona con la parte disposi-

tiva de la sanción de la cámara de diputados relativa á la deficiencia de franqueo, en el sentido de que se cobre á domicilio, con la multa correspondiente, me parece conveniente esa modificación.

Actualmente la dirección de correos pasa un aviso al destinatario de la carta, comunicándole hallarse ésta detenida por falta de franqueo, y le obliga á concurrir á la oficina, á pagar la multa correspondiente. La cámara de senadores modifica esa parte, diciendo que debe hacerse el cobro á domicilio.

En ese sentido, la comisión de presupuesto aconseja á la honorable cámara que acepte dicha modificación.

**Sr. Presidente**—Si no hay oposición, se votarán las dos modificaciones conjuntamente.

—Se vota si se aceptan las modificaciones introducidas por el honorable senado, y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente**—Queda sancionado definitivamente el proyecto.

## ORDEN DEL DIA

### CÓDIGOS MILITARES

**Sr. Presidente** — Quedó pendiente la discusión del artículo 3º del proyecto de ley sobre códigos militares.

**Sr. Barroetaveña**—Pido la palabra.

En sesiones anteriores, me permití presentar á la honorable cámara algunas observaciones fundamentales respecto de la constitucionalidad de varios artículos de los códigos militares, que han sido aprobados en general, y prometí concretar para la sesión de hoy esas observaciones, refiriéndome á los artículos que debían ser susceptibles de modificación, segun las ideas que voy á exponer.

Mi afirmación podría parecer temeraria á alguno de los miembros de la cámara que no hubieran estudiado con detenimiento estos proyectos, porque el gran título con que los presentó el señor ministro de la guerra á la consideración del congreso, fué el haber sido confeccionados por una comisión en la que figuraban letrados distingui-

dos y militares ilustrados de nuestro ejército, y presentarse, además, apoyados por el dictámen de la comisión de guerra, de la cual forma parte: un distinguido abogado, juntamente con militares de preparación.

Sabido es, señor presidente, el poco tiempo de que hemos dispuesto para estudiar estos códigos militares, remitidos por el poder ejecutivo recién el 8 de octubre, habiéndose distribuido hace poco tiempo á cada diputado un ejemplar del proyecto, junto con el dictámen de la comisión, precisamente en la misma época en que nos encontrábamos preocupados con debates diarios, cuando sesionaba la cámara sin interrupción.

Pero aun así, á pesar del estudio breve que había hecho de estos proyectos, encontré algunas discordancias fundamentales, ó más bien dicho, encontré que algunos de sus textos capitales estaban en abierta contradicción con la constitución nacional.

Por la gravedad de esta afirmación, solicité de la honorable cámara postergara la consideración del dictamen de la comisión hasta la sesión actual, para poder presentar en concreto algunas de esas observaciones.

En uno de los artículos de la ley sobre organización y competencia de los tribunales militares, se establece que ejercen la jurisdicción militar los comandantes en jefe del ejército, de escuadra, buques, expediciones, plazas, etc., y como el general en jefe de todas las fuerzas es el presidente de la República, á *prima facie* salta la inconstitucionalidad de este inciso si él lo comprende; porque la constitución, en el artículo 95, dice terminantemente que el presidente de la República en ningún caso ejercerá funciones judiciales, ni podrá arrogarse el conocimiento de causas pendientes ó restablecer las fenecidas.

Y si no lo comprende, es preciso que el inciso expresamente diga que el presidente de la República queda excluido de esa categoría de militares que ejercen funciones judiciales, porque como está resultando contradictorio con el texto constitucional.

Puede decirse que esta es una omisión de redacción, y que no ha sido el ánimo de la comisión redactora, ni el de la comisión que ha dictaminado sobre estos códigos, conferir al presidente de la República funciones judiciales.

Otro de los puntos mas graves que encuentro en el proyecto de código de organización y competencia de los tribunales militares, es el que se refiere á la manera de formar los consejos de guerra.

Establece que por cada delito ó infracción sometidos á los tribunales militares, debe constituirse un consejo de guerra, para que especialmente falle el caso ocurrente, y con posterioridad á él.

De manera que es un caso típico de tribunal ó comisión *ad hoc* para fallar *ex post facto* sobre una infracción del código militar.

Necesito recordar el artículo 18 de la constitución, que terminantemente prohíbe que ningún habitante de la república pue la ser juzgado por comisiones especiales ó sacado de los jueces establecidos por la ley con anterioridad al hecho del proceso.

Podría contestarse que estos tribunales *ad hoc*, estos consejos que van á fallar *ex post facto*, no se formarán tan arbitrariamente, porque en el proyecto se indica que para cada caso en que deba formarse un consejo de guerra, el jefe que se nombre como presidente del consejo debe sortear, de una lista que le presente el estado mayor, los miembros del tribunal de guerra, en presencia del auditor, del fiscal militar, del defensor del reo y del reo mismo, si lo solicita.

La comisión redactora de estos códigos, en la exposición de motivos con que los acompaña, dice que con esta precaución se salva la inconstitucionalidad que de otra manera tendrían estas comisiones *ad hoc* nombradas para fallar *ex post facto*.

Pero si bien se medita sobre esta precaución, es ella tan débil, y tan poco feliz para asegurar la fijeza, la imparcialidad, la rectitud misma de los consejos de guerra, que, me parece, han caído los miembros de la comisión re-

dactora en un error, seducidos por un argumento que á primera vista parece convencer, pero que no resuelve nada.

Así, se dice: no es una comisión *ex post facto*, porque el ejército y el país saben de antemano que cuando ocurra algun delito que corresponda juzgar á los tribunales militares, se ha de formar el consejo de guerra con los militares que vayan en la lista que se pide al estado mayor; y si es así, ocurrirá con estos tribunales como con el jurado, que no es un tribunal de organización y funcionamiento permanente, sino que se constituye y se nombra para cada caso ocurrente, *ex post facto*.

A primera vista seduce esta comparación; pero, como ha dicho un gran jurisconsulto, la comparación no es siempre un argumento convincente.

Breves palabras me bastarán para demostrar á la honorable cámara que esta clase de consejos de guerra, ó esta manera de formarlos, no se asemeja ni al jurado, ni tampoco escapa á la condenación que se encuentra en la carta fundamental contra las comisiones especiales, que fallan *ex post facto*.

Desde luego, establece el código que, ocurrido el caso de un delito de fuero militar, el jefe que debe constituir el consejo de guerra, y que puede ser nombrado por el presidente de la República, pedirá al estado mayor una lista de militares hábiles, para sortear los que deban formar el consejo.

Pero, desde luego, ocurre hacer esta reflexión: que esa lista será formada sin duda alguna *ex post facto*, desde que se va á pedir y á confeccionar despues de la consumación del hecho.

Y ya sea por orden directa del jefe del estado mayor, ó del presidente de la República, ó del ministro de la guerra, se formará una lista *ad hoc* y *ex post facto* de los militares hábiles para constituir el consejo de guerra, entre los cuales debe sortear el presidente los jueces.

Si es esto así, queda en manos del presidente de la República, del ministro de la guerra y del jefe del estado mayor, mandar listas, en cada caso ocurrente, en las que solo estén incluidos aquellos que han de fallar no con arreglo

á los dictados de la justicia, sinó según sus superiores jerárquicos quieran condenar. No serán, pues, jueces imparciales.

Como se ve, esa lista es *ad hoc* y el tribunal será también *ad hoc*, para fallar *ex post facto*. Luego, queda comprendido dentro de la cláusula condenatoria de la constitución nacional.

Algunos jurisconsultos de nuestro país han creído que esta prohibición constitucional se refiere al orden común de la jurisdicción civil y ordinaria, que no comprende al ejército.

Pero se destruye esta observación con solo leer el encabezamiento del artículo, que empieza diciendo: «Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ó sacado de los jueces designados por la ley, antes del hecho de la causa.»

De manera que están comprendidos también los miembros del ejército.

En cuanto á la comparación con el jurado, no puede hacerse con fundamento.

El jurado, como se sabe, es la democratización de la justicia; el jurado significa: fallo por medio de jueces sorteados de una lista numerosísima de vecinos de la comuna ó jurisdicción, en donde figuran hombres de todos los gremios sociales: abogados, médicos, ingenieros, comerciantes, industriales, letrados, etc.

En una palabra: el pueblo con todas sus facetas, calificado en una lista numerosísima de donde se elijen los miembros de esa gran agrupación, para fallar en el caso ocurrente, dando mucha amplitud de recusación sin causa y de recusación por las múltiples causas que reconoce el derecho.

Después, el juicio por jurado es la vida normal de las sociedades, permitiéndose todos los medios de prueba y la discusión libre y general; mientras que la formación del consejo de guerra sorteado de listas *ad hoc*, de listas formadas después del proceso, no importaría la democratización, sino que significaría la quinta esencia del funcionarismo—y ¡qué funcionarismo! el funcionarismo militar, de la clase que está sometida á la voluntad y al mando del

jefe del estado, por la jerarquía, por la disciplina, por el empleo militar que desempeñan: por todo ese conjunto de poderes inmensos que se ha conferido al jefe del ejército, porque es entre sus subordinados de donde se ha de elegir la comisión ó consejo de guerra que debe fallar ó condenar en los casos ocurrentes.

De manera que, aún cuando en el jurado, como en los consejos de guerra que se propone, se forma el tribunal *ad hoc y ex post facto*, se reconoce en él y se garante la más amplia libertad popular en la administración de justicia, porque no interviene ningún funcionario público en la formación de las listas de vecinos, ni el presidente de la República, ni el jefe del estado mayor—sinó que lo marca la ley con anterioridad á la época del proceso, sin ninguna intromisión gubernativa, rodeando el acto de las mayores formalidades.

La formación de consejos de guerra *ad hoc* para fallar *ex post facto*, importa poner en manos del jefe del estado el nombramiento de los tribunales dentro del número de militares que él quiera: deja, entonces, librado á su voluntad que nombre como jueces á aquellos que pueden ser quizás enemigos de los reos militares ó instrumentos del presidente de la República, para que vayan á condenar, y no á fallar imparcialmente después de oír en debida forma la defensa.

Creo, pues, haber demostrado con estas breves consideraciones que los consejos de guerra que se proyectan están condenados por la constitución, que están abiertamente en contra de textos fundamentales de ella.

Y si una palabra no bastara, señor presidente, para autorizar esta conclusión, tengo que ocurrir, como decía en otra ocasión el señor diputado por Corrientes, á citas ó referencias de jurisconsultos distinguidos que sostienen las mismas ideas.

No voy á leer á la cámara páginas ni párrafos de obra alguna. Voy á limitarme á una breve referencia respecto de uno de los trabajos más notables hechos en el país sobre este punto, y en que, como digo, se sostiene la misma tesis que defiendiendo: que los consejos de

guerra *ad hoc* y *ex post facto* están condenados por la constitución.

Circula un libro notable, publicado en 1875, suscrito por jurisconsultos eminentes de nuestro país y por militares distinguidísimos. Me refiero á la defensa de los jefes rebeldes complicados en la revolución de 1874, redactada por abogados de la talla de los doctores José María Moreno, Manuel Quintana, actual ministro del interior, Félix Frias, Juan Carlos Gómez, Domingo Frias, y por militares como el general Emilio Mitre.

En ese trabajo verdaderamente luminoso, porque se encierra en él, á la vez que un estudio crítico de nuestras instituciones militares, un estudio de legislación comparada y un estudio fundamental de los principios de derecho que dominan la materia, se ha llegado á las mismísimas conclusiones á que arriba. De manera que puedo decir á la cámara que esta opinión, de que los consejos de guerra *ad hoc*, formados *ex post facto*, están condenados por nuestra carta, es compartida en esa exposición científica por los doctores Manuel Quintana, José María Moreno y otros juristas cuya reputación es de todos conocida.

Con posterioridad á este interesante trabajo, se han publicado otras defensas militares en que se llega á las mismas conclusiones. Hace muy poco tiempo, el doctor Aristóbulo del Valle pronunció una defensa brillantísima, sosteniendo la misma tesis ante la suprema corte federal.

El doctor Wilmart, otro abogado distinguido de nuestro foro, presentó también ante el juez federal un ilustradísimo trabajo en igual sentido.

Concluyo, señor presidente, afirmando que esta manera de constituir los consejos de guerra es abiertamente inconstitucional. Creo que nuestro ejército, que nuestro país, si se aprueba el proyecto, no tendrán consejos que distribuyan igualmente la justicia en los casos de delincuencia militar, sino que tendrán comisionados que aplicarán la ley llevando tal vez los ódios, pasiones, rencores y errores del jefe del poder ejecutivo, que es quien manda hacer la

lista *ad hoc* para formar el consejo de guerra.

Otra de las críticas que formulo al proyecto de organización y competencia de los tribunales militares, es respecto á la extensión que se da á la jurisdicción de estos consejos de guerra. Se dice que comprenden no solo todos los casos de delitos puramente militares, es decir, de aquellos que solamente los militares pueden cometer, sino también todos los delitos comunes cometidos por militares cuando se encuentren en buques de guerra, fortalezas, fronteras, fortines y lugares dominados por fuerzas militares.

¿Por qué fundamentos?

No he podido encontrarlos en la exposición de motivos de la comisión redactora. He revisado, esta mañana, el informe que presentó sobre proyecto análogo la comisión del 82, y allí encuentro la explicación para extender la jurisdicción de los tribunales militares á causas comunes.

Se dice que si se extendiera á todos los delitos comunes que cometiesen los militares, se iría contra el texto de la constitución, que ha abolido los fueros personales, aboliendo por lo tanto el fuero militar, semi-abolido ya por la ley provincial de 1823.

Se dice que los delitos comunes que se cometen dentro de fortalezas, fortines, ó lugares dominados por fuerzas militares, deben corresponder á los tribunales militares, porque quedaría debilitada la autoridad militar en esos lugares, si los reos de delitos comunes tuvieran que ir á la justicia ordinaria.

Se ha incurrido en un grave error, ó mas bien dicho, es inaceptable la distinción entre los delitos comunes en general en que pueden incurrir los militares, y los delitos comunes en esos mismos lugares, que deben corresponder á la jurisdicción militar.

Desde luego, todo eso no cambia la naturaleza de los hechos. Si el delito es común fuera de los cuarteles, lo es también dentro de los cuarteles. Si el delito lo perpetran militares y civiles al mismo tiempo, aunque sea dentro de un cuartel, los reos civiles pasarán á la justicia

ordinaria y los reos militares pasarán al consejo de guerra.

¿Por qué? ¿Por razón de la naturaleza del delito? No, porque corresponde á la jurisdicción civil. Entonces es por razón de las personas, porque son militares,—y eso es restablecer el fuero militar, porque éste consiste en llevar á los tribunales militares todos los delitos ó infracciones cometidos por militares.

De manera que aún reducido á la delincuencia dentro de los cuarteles, fortalezas y plazas de guerra, esta jurisdicción militar es violatoria de la constitución, porque crea un fuero personal abolido por ella.

Tal vez ha sido inducida en error la comisión redactora del proyecto, por la ley de 1823, que si bien en los primeros artículos declara abolidos los fueros personales, en el artículo 4º dice que los delitos comunes cometidos en los campamentos y fortines serán sometidos á los consejos de guerra. De modo que solo abolía el fuero militar para los casos de delincuencia fuera de esos lugares.

Si en tales casos procedía el fuero, podía admitirse el artículo del código, antes del 53, antes de la constitución nacional, que abolió los fueros personales en absoluto, sin ninguna restricción.

¿Qué grandes ventajas, señor presidente, ofrecerían los tribunales de guerra permanente, en lugar de estos consejos de guerra *ad hoc* para fallar *ex post facto*?

No voy á decirlo yo, para no fatigar más á la cámara con exposición propia; me voy á permitir citar unos párrafos elocuentísimos sobre esta cuestión, de la ilustrada exposición de motivos que formuló la comisión nombrada el año 82 para redactar el proyecto de código de procedimientos militares. Allí se expone el fundamento primordial de la permanencia de los tribunales militares.

Hablando del orden militar observa que los militares critican la lentitud ó morosidad de los tribunales permanentes ordinarios, y dice: Efectivamente, los tribunales permanentes serán más morosos que estos tribunales rápidamente constituidos; pero esto no es un motivo

para que se deseche su jurisdicción. La constitución misma lo dice.

«Esto responde, sin duda,—afirma la comisión—á las dificultades que presenta siempre una organización permanente, y con mayor razón á la necesidad de dejar en los jefes superiores, á quienes corresponde el mando, una autoridad casi sin límites reclamada por la disciplina militar, y que abandonaba á su voluntad el castigo ó el perdón en su mayor amplitud, una vez que la composición no obedecía á reglas determinadas en cuanto á las personas á designarse.

«Pero si bien en la actualidad las reglas y exigencias de la disciplina no pueden ser desconocidas, puesto que en su mantenimiento y conservación estriba precisamente todo el mecanismo, que es garantía del soldado y garantía de la sociedad que le entrega las armas para su defensa, y que pueden volverse contra ella,—no puede desconocerse tampoco que tal manera de componer los consejos no consulta ni los altos y graves intereses de una justicia bien administrada, ni los intereses de los acusados, en presencia de aquellos mismos que directa ó indirectamente y como superiores jerárquicos, pueden estar interesados en el castigo, y á quienes corresponde la designación de los jueces

«En el orden común ú ordinario nadie puede ser juzgado por comisiones especiales y determinadas para cada caso, y esta máxima ha sido considerada como una conquista de la ciencia, encontrándose incorporada á nuestros principios constitucionales; y si es verdad que tales principios no han sido considerados de aplicación á los tribunales militares, no vemos porqué no se ha de tratar de incorporarlos, adaptándolos en cuanto sea posible á las exigencias del régimen y disciplina militar.

«El particular como habitante del estado, sabe y conoce de antemano quien es su juez, y que para examinar las infracciones que pueda cometer, nadie podrá sacarlo de su jurisdicción, sin cometer uno de los más graves atentados.

«Ahí está su garantía; para la imparcialidad y rectitud, porque designado de antemano no se tenía en cuenta una in-

fracción dada, é inamovible en su puesto no teme la separación del cargo; para su juzgamiento, porque no es al juez inexperto y que jamás ha intervenido en un proceso, á quien entrega el examen de su conducta, de su vida y de su honor, sino al magistrado ayesado á los juicios criminales y con competencia probada en sus títulos profesionales.»

«¿Por qué al militar no se le ha de colocar en circunstancias idénticas, en cuanto fuera posible? ¿Por qué no se le han de buscar garantías para su vida y su honor, si por ser militar no ha dejado de ser hombre y ciudadano, y su honor y su vida valen tanto como la del particular? Comprendemos las dificultades que esta semejanza trae, una vez que se trate de situaciones diferentes y en presencia de exigencias que no suelen tener límites en sus exageraciones, pero es indispensable acercarse á ello en lo posible.»

... «Y así, la permanencia se proyecta, en cuanto á los tribunales mismos, determinando las secciones territoriales en que deben tener su asiento, y en cuanto al personal, en tanto deben juzgar las infracciones hasta cierta categoría de infractores, dejando la variación para otros de éstos, pero tomando los vocales del escalafón que debe formarse de antemano.»

«Esto, en cuanto á los tribunales con jurisdicción en tierra; aprobando solo la formación de consejos *ad hoc*, (no con listas preparadas *ad hoc*, sino de antemano,) para el caso de expediciones lejanas y fuera del territorio nacional.»

Esto expone la comisión redactora del proyecto de código presentado al congreso el año 81, compuesta de militares distinguidos y de jurisconsultos de nota, entre los cuales veo figurar alguno de los mismos que han suscrito el proyecto aprobado en general por la cámara; el doctor Obarrio, presidente, el doctor Alcorta, el doctor del Valle, el comodoro Solier, el coronel Santa Cruz y el doctor Estanislao Zeballos.

No había inventado en esto, porque la legislación comparada presenta ejemplos de un grupo de naciones muy adelantadas de Europa, donde existen organizados consejos de guerra permanentes.

Tampoco había carecido de preceden

tes en nuestro país: había tomado en consideración un trabajo redactado por el general Mansilla, comisionado, el año 76, por el presidente Avellaneda para proyectar la legislación militar.

La comisión redactora del proyecto aprobado en general, dice que ha seguido como modelo á la legislación inglesa y americana, para establecer los consejos *ad hoc* que fallen *ex post facto*.

Pero, si bien es cierto que en Inglaterra y Estados Unidos se procede de esta manera en la formación de los consejos de guerra, también lo es que un grupo numeroso de naciones europeas, muy adelantadas, tienen sus tribunales permanentes. Y en Estados Unidos mismo, como en Inglaterra, como en España (que tienen la organización *ad hoc* de los consejos de guerra; pero permanente el supremo consejo) digó, en estos países, se concede la apelación: en Inglaterra, por ejemplo, para ante las cortes civiles, de las sentencias por delitos mas graves, que pronuncian las cortes militares.

La comisión, pues, me parece que ha cometido un error en separarse de estas consideraciones tan pertinentes, tan fundamentales, que se expusieron el año 81; adoptando ahora los tribunales *ad hoc*, en lugar de los permanentes.

Pero, como se encontró con el texto de la constitución nacional, que condena esta clase de tribunales, en la exposición de motivos se estudia lo que significa ese pasaje de la constitución.

Se dice que ha sido mal comprendida, de una manera exagerada; que la constitución no proscrib, por esa cláusula, la formación de los consejos de guerra *ad hoc*. Se dice que la cláusula constitucional no ha sido tomada de la constitución americana; que tampoco emana de la carta magna, ni de ninguna constitución anterior á la nuestra; y que, aun cuando esa cláusula se encuentre en otras constituciones de América, no ha tenido tan ilustre abolengo; por lo cual es permitido armonizar estos consejos de guerra *ad hoc*, puesto que no emana la cláusula ni de la constitución de los Estados Unidos ni de la carta magna. Se concluye que es una originalidad de nuestra consti-



Noviembre 2 de 1894

CÁMARA DE DIPUTADOS

8ª sesión de próroga

tución, y que tiene por precedentes los excesos que se cometieron durante la Revolución en Francia; los procesamientos por comisiones, y los excesos de la dictadura del tiempo de Rosas.

Me parece que la comisión no ha sabido buscar, con sagacidad, el origen de esta cláusula constitucional.

Ese pasaje de la constitución, como casi todo el artículo, está tomado, al pie de la letra, del proyecto de constitución del doctor Alberdi; y en el original se encuentra esta brevísima nota: «El fin de esta disposición es abolir la penalidad de la Edad Media, que nos rige hasta hoy, y los horribles castigos que se han empleado durante la revolución».

Y ha concurrido, así, á confirmar el origen de la cláusula constitucional, que como se ve es mas antigua que la carta magna y que la constitución de los Estados Unidos, un episodio que ocurrió en Francia en tiempo de Francisco I. Voy á leer á la cámara este brevísimo caso:

«Cuenta la historia del parlamento de París que un maestro de campo de Carlos VI, Montaigne, fué así juzgado, sentenciado y ejecutado (es decir, por comisiones especiales). Su cuerpo recibió sepultura en la iglesia de los Celestinos.

«Más tarde, pasados los años, visitó Francisco I el convento; vió la lápida que tenía inscripto el nombre de Montaigne, y dijo: Este hombre fué muerto por la justicia. El monje que lo acompañaba le contestó con simplicidad y con llaneza: No, Sire, no fué muerto por la justicia; fué muerto por comisionados! Lieber recuerda la anécdota, que considera digna de Plutarco, y dice: Es la mejor ilustración de la diferencia que existe entre la justicia, esto es, el derecho distribuido á los hombres por jueces legítimos, y los juicios por comisiones de excepción».

Trae este episodio histórico el doctor Del Valle al terminar la defensa del fuero civil para los casos de rebelión de los militares, y concluye con estas palabras:

«La conciencia del monge humilde del siglo XVI, como la conciencia nacional de nuestros días, á través de las edades, distingue la aplicación recta de

la ley, que es la justicia, del arbitrario, que es la iniquidad.»

De manera que nuestra cláusula constitucional responde á proscribir de la administración de justicia civil y militar, para todos los habitantes de la República, el sistema de procesar por comisionados, por comisiones especiales nombradas *ad hoc* para juzgar, despues del hecho, con todas las impresiones, con todos los enconos, con todos los errores á que están expuestos los que forman los tribunales *ad hoc*.

Tenía razón el doctor Alberdi; esta manera de juzgar, como el tormento, como los demás rigores excesivos del procedimiento inquisitorial antiguo, emanaban del feudalismo. Los señores feudales aplicaban todo género de tormentos, y cuando ellos no juzgaban directamente, nombraban comisionados especiales para que juzgaran, como al maestre de campo de Carlos VI.

En nuestro país, si bien no se ha prodigado despues de la época constitucional esta manera de juzgar por comisionados, por comisiones especiales, han existido ciertas prácticas que me duele, pero que es necesario recordar, cuando se trata de encubrir con la ley algo peligroso hasta para la civilización. Son ciertas prácticas funestas seguidas en épocas de turbulencia política. Ocurre en nuestras provincias, no el procesamiento por comisiones *ad hoc*, sino que se ultima, que se mata al adversario por medio de agentes nombrados *ad hoc*, pretestando después que se resistieron.

De manera que nuestra cláusula constitucional responde á un principio salvador de la buena administración de justicia, para el orden civil como para el orden militar, y conviene respetarla.

Así lo aconseja la comisión formada por militares distinguidos y por jurisconsultos de nota. Poco importa que despues algunos de esos jurisconsultos hayan cambiado de opinión por las razones inaceptables que dan ahora.

Queda, pues, demostrado que estos tribunales *ad hoc* están fuera de la constitución, que son contrarios á la Carta fundamental.

Voy á ocuparme de otro punto que la comisión redactora resuelve contra la



constitución también, y contra principios fundamentales de nuestro derecho positivo. Es aquel en que define y pena los delitos políticos en que incurren los militares.

No dice la comisión ahora,—pero se dice fuera del dictámen,—que el militar al incurrir en un delito político incurre también en un delito militar, y que el tribunal de guerra, con el rigorismo de las leyes militares, debe traer la causa á sí y prescindir de la jurisdicción civil.

El notable trabajo á que me he referido, publicado en 1875, que lleva la firma de jurisconsultos ilustrados, hace la demostración más concluyente á este respecto, sosteniendo que los delitos políticos jamás pueden conducir á los militares que incurran en ellos á la jurisdicción militar; que corresponde su juzgamiento exclusivamente á la jurisdicción civil.

Pero se me dirá: el procesamiento por los consejos de guerra de los militares que incurren en delitos políticos, no atrae á los reos civiles, á los cómplices ni á los autores principales de la rebelión ó sedición; deja al elemento civil entregado á la judicatura civil; solo atrae á la jurisdicción de guerra á los militares comprometidos en la rebelión.

El doctor Quintana y los demás firmantes de ese trabajo luminoso, se han ocupado de demostrar cómo esto significaría una *monstruosidad* en derecho político. La expresión es dura, pero es la palabra que usan, para no confundir el rigorismo severo de la justicia militar, con la legislación tolerante, adelantada del orden civil, en los casos de delitos políticos. Hacen un estudio completo de la materia, y concluyen con una página brillante del orador Berryer, en la cual demuestra lo que resultaría de aplicar á los reos militares de una rebelión política el procedimiento de los tribunales de guerra y la severidad de las leyes militares, y por jueces ordinarios castigos siempre más moderados, á los reos civiles del mismo delito.

Así combate precisamente esta disyunción que ahora presenta el proyecto sometido á la consideración de la cámara; esta disyunción que con-

siste en mandar dos reos de idéntico delito, uno al consejo de guerra y otro al tribunal civil. Y á este respecto Berryer recuerda lo que pasó á Napoleón III, que también fué procesado por los levantamientos de Tolon y de Estrasburgo, haciendo resaltar el célebre orador, con elocuente palabra, el inícuo contraste que resultaría de aplicar para los mismos hechos diversas medidas: para unos reos la judicatura civil que aplica penas levísimas, ó que absuelve, ó que corona de laureles; para los otros, la jurisdicción militar, que con frecuencia lleva al patíbulo y que, con adusta severidad, dice á los hombres de espada: Para vosotros, el cadalso ó el presidio; para los hombres civiles, la benignidad ó los laureles.

Y Berryer demuestra, en admirables frases, que esto no solo sería una iniquidad, no solo conspiraría contra los fundamentales principios de la justicia, sino que desquiciaría la sociedad civil y desquiciaría el ejército, desde que se verían rijiendo leyes que amenazaban á unos con la pérdida de la vida, y por el mismo delito ofrecían á otros los estímulos del perdón.

El proyecto de código penal sometido á la consideración de la cámara define y castiga los delitos de rebelión y sedición, con penas mucho más severas que las penas que establece la ley de justicia federal al legislar sobre los crímenes y delitos del orden nacional.

Así, por ejemplo, la ley de justicia federal, de 1863 impone la pena de extrañamiento y de multa, mientras que las penas que el código militar aplica son las de doce á quince años de penitenciaría, con más, los gravísimos accesorios que trae consigo esa penalidad.

Por este peligroso error de extender el fuero militar, la ó jurisdicción de los tribunales de guerra á los delitos que cometan los militares que se encuentran en regiones dominadas por el ejército, ó en cuarteles, y á los mismos militares rebeldes, se ha llegado al caso de tener que formar otro código penal. Así, el código militar, que debiera contener solo los delitos que exclusivamente puedan cometer los militares, contiene también delitos del orden común; pero agra-

vando lo que respetaron los dos Napoleones: las penas del código criminal.

De modo que no solo se va contra los preceptos de la constitución, sino que se va hasta derogar nuestro código penal haciendo otro mucho mas severo é inexorable para los militares. Se va, pues, mas allá que Napoleón I y que Napoleón III, respecto de quienes no se puede dudar que tuvieran el propósito de debilitar el imperio militar.

V. ya que cito á estas dos grandes personalidades de la historia contemporánea en el orden militar y político, debo recordar á la cámara que los dos Napoleones hacían constar, uno en el consejo de estado y el otro ante el parlamento, en el mensaje con que mandó el proyecto de código: que la judicatura civil aplicada á los delitos comunes cometidos por los militares, había dado excelentes resultados; que no había nada de qué quejarse, ni por lo que respecta á la disciplina del ejército, ni tampoco al poder militar del país.

¿Por qué digo que este código, al extender la jurisdicción de los tribunales de guerra á los delitos políticos en que incurran los militares, va contra la constitución?

Porque el congreso, de acuerdo con la ley fundamental, ha dictado una ley de justicia federal en que define y castiga los delitos de fuero federal, de fuero nacional, y en ella están perfectamente definidos y penados los delitos de orden político contra la estabilidad del gobierno, contra la estabilidad de la constitución.

Si lo están, pues, por esa ley de justicia federal, cuya aplicación corresponde á los tribunales ordinarios de la nación, el sacar los reos militares de esta justicia natural encargada de fallar sus causas, y someterlos á los tribunales de guerra, importa atacar la constitución.

Así, no solo se restablecería el fuero personal, sino que se sacaría á un grupo de habitantes de la República de la jurisdicción de los tribunales federales, para entregarlos á los consejos de guerra; se modificaría el código penal, dictando otro para los delitos comunes de los militares; y, todo esto, señor presidente,

sin aducir un motivo, una razón, nada que se haya explicado ante esta cámara ni, tampoco, en la nota en que se propone estas graves reformas á nuestra legislación.

Me ha llamado la atención, señor, la rapidez con que se sanciona este proyecto de código, y me sorprende tanto más cuanto que, apesar de las graves cuestiones que resuelve, no hubo miembro informante de la comisión tanto mas necesario cuanto que insinuó la idea de proponer la aprobación del código á libro cerrado, casi sin examen previo.

Insisto, pues, en la necesidad de haber oído un estudio fundamental de la comisión que debió ilustrar á la cámara sobre las principales disposiciones del código; porque estas leyes militares no se pueden equiparar á los códigos de derecho común, al código civil, al comercial, al penal mismo, ni al de minería. Todos estos contienen un cuerpo de doctrina, de leyes que vienen, desde mucho tiempo, casi sin modificarse. De manera que el congreso argentino pudo haber encargado la confección de un código civil á un jurisconsulto cualquiera notable de nuestro país, ó de cualquier nación á un Laurent, á un Garcia Goyena, á un Demolombe, ó á cualquier otro, y aprobarlo á libro cerrado, porque habría la presunción de que ese código encerraba un cuerpo de doctrina civil que viene mejorándose desde los romanos.

Me basta citar el caso del código de Napoleón, iniciado bajo la república y promulgado bajo el primer imperio, y que á pesar de nuevas formas de gobierno, ha quedado inalterable en todo lo fundamental, sirviendo de modelo á países monárquicos y republicanos.

Lo mismo podría decir del código de comercio, cuya confección puede entregarse á cualquier comercialista ilustrado; y otro tanto respecto del código de minería y del penal.

Pero respecto de los códigos militares, que vienen á comprometer cuestiones fundamentales de nuestra organización institucional; que afectan al fuero personal, que establecen la judicatura del presidente de la República abolida por la

constitución, que importan la supresión de la justicia civil para los miembros del ejército reos de delitos comunes, sostengo, señor presidente, que tan graves soluciones no han debido nunca aprobarse á libro cerrado.

Ahora llego al final de mi exposición.

Prometí á la honorable cámara presentarle un cuadro de modificaciones ó reformas del código; pero encuentro que es tan difícil la tarea de modificar los numerosos artículos que afectaría el cambio respecto de la organización de los consejos de guerra, de la jurisdicción misma, de algunos puntos de procedimiento, de ciertas penas excesivas y aun inconstitucionales, que no me ha sido posible, en el breve tiempo de que he dispuesto, presentar esa planilla de alteraciones.

Tratándose, entonces, de cuestiones tan graves y trascendentales, me permito hacer moción para que este proyecto de código vuelva á comisión, á fin de que tome en consideración las observaciones fundamentales que presento á la honorable cámara; y si la comisión tiene la amabilidad de llamarme á su recinto, tendré el mayor gusto en indicarle las reformas que creo deben introducirse en el código para salvar las inconstitucionalidades apuntadas. Así habremos formado un código que resista á la crítica, sobre puntos tan graves;—y lo sancionaremos pronto: será cuestión de ocho ó diez días más.

De lo contrario, temo que este proyecto sea rechazado en el senado mismo. Y si se convierte en ley, no dudo que ante la justicia federal, si hay una alta corte que mantenga el imperio de la constitución, en todos los casos ocurrentes en que se aleguen las inconstitucionalidades apuntadas, triunfará el derecho, y este código será declarado contrario á la constitución.

La suprema corte ha dictado un fallo en un caso ruidoso, reciente, en que fué procesado un militar por un delito político, y en el que ha establecido que correspondía la jurisdicción de los consejos de guerra.

Pero ese fallo no puede aspirar á formar jurisprudencia en nuestro país. Ha

salido desautorizado por este solo hecho: de los cinco ministros de la corte, tres han estado por la competencia de los tribunales militares y dos por la competencia de los tribunales federales.

En el mismo sentido se pronunció la opinión lapidaria, de un procurador de la nación, que fué notable jurisconsulto, el doctor Pico, en el año 75, estableciendo que es exclusiva la jurisdicción de los tribunales federales.

Opinan lo mismo los jurisconsultos notables que he citado: el doctor Quintana, el doctor Moreno, Juan Carlos Gómez, y teniente general Mitre, que sostienen idéntica tesis. Están los dos fallos del juez Lalanne; dos vistas notables del fiscal Bustillos, sosteniendo la misma doctrina.

Y yo digo: cuando se presentan estas graves consideraciones á la cámara, ¿no merecerán ellas la consideración de que el proyecto vuelva á comisión, para que en breves días salga mejor; si es que llego á convencer á los colegas de la procedencia de estos argumentos, ó para que insistan en ellos, si es que se convencer de que estoy en error?

Por todo ésto, amando al ejército de mi patria, deseándolo poderoso, pero un ejército de democracia, con hombres libres; con tribunales levantados que les apliquen verdadera justicia, no con comisiones que los condenen como se juzgaba en tiempo de Carlos VI de Francia; con una codificación militar que se encuadre dentro de la constitución, sin la legislación foral de la Europa, en donde los colosales ejércitos permanentes exigen el sacrificio del derecho común; por todo ésto insisto, señor presidente, en que el proyecto vuelva á comisión.

De otra manera, si debiera presentar en el momento las modificaciones al código, declaro que no me ha sido posible preparar la planilla de modificaciones.

He dicho.

**Sr. Alvarez**—Pido la palabra.

He escuchado con gran interés la notable exposición del señor diputado por la capital. Yo esperaba de él una pieza de esa importancia, á la altura, sin duda de la que hizo ante la suprema corte el doctor del Valle, cuando actuó como

defensor en la causa á que se ha referido el señor diputado.

Reconozco que su discurso de ahora responde, por su magnitud, por su importancia, y por su fondo también, á ese otro, que quedó memorable.

Yo tendría muchísimo placer—yendo al fondo de la cuestión, al espíritu que anima al señor diputado, en acompañarle á presentar un proyecto de reglamentación de la rebelión y de la sedición; tendría muchísimo placer en acompañarle á presentar un proyecto de ley que reglamentase la revolución; pero, desgraciadamente, esto no es posible: lo anormal no admite reglamentación; en ningún país del mundo se ha podido hacer, jamás. Tenemos forzosamente, entonces, que contraernos á reglamentar las cosas tales como deben ser.

Tengo á la mano la sentencia de la corte, en donde fueron rebatidos todos los argumentos expuestos tan brillantemente por el doctor del Valle. Podría leerla á la cámara, y entonces la autorizada palabra de los miembros de la suprema corte podría dejar contestado lo que el señor diputado ha dicho. Podría, además, recordarle que los únicos miembros de ese tribunal que firmaron en disidencia (fueron dos), no lo hicieron por considerar que la justicia militar no pudiera ser administrada por consejos de guerra, sino porque entendían que los delitos de rebelión y de sedición no estaban comprendidos en las ordenanzas que nos rijen, en virtud de que en 1794, cuando estas ordenanzas fueron redactadas, esos delitos caían bajo la jurisdicción común: era la justicia plebeya, la justicia seria, dura, inexorable, la que reñía á los militares. Precisamente por considerarse en aquel entonces crímenes de lesa patria, fueron excluidos de la justicia militar privilegiada, que constituía un fuero, y entregados á la justicia plebeya, á la justicia común, que era mucho más grave y mucho menos garantida que la justicia militar.

Y me extraña que el señor diputado haya sostenido, en el cuerpo de su exposición, que este proyecto, que somete á los militares á una penalidad mas grave que á los ciudadanos ordinarios, impor-

ta el restablecimiento de los fueros personales, que fueron abolidos por la constitución.

La palabra *fuero*, en mi concepto, no se puede aplicar ahora, en la interpretación de la cláusula de la constitución, sino en el sentido de ventaja: fueron abolidas todas las ventajas personales, nada más. Pero no han sido abolidas las cargas personales, ni ha sido abolida la jurisdicción de causas.

La primera ley que se dió sobre el particular, fué la de 7 de julio de 1823. Y voy á tener el gusto de recordar al señor diputado un decreto de Rivadavia, en el que se explica el alcance y significado de esa ley.

Ese decreto lleva la fecha 8 de julio de 1823, es decir, del día siguiente á aquel en que se dictó la ley que declaró abolidos los fueros personales.

Dice así: «Los gobiernos representativos, por el contrario, como su base, su seguridad y todos sus intereses están en la perfección social, tienen por una de sus primeras atribuciones el no reconocer mas diferencias de jurisdicciones que las que exige la *naturaleza* de los distintos servicios públicos y de los mismos asuntos que se sujetan á juicio; y el grado de perfección á que un país ha llegado en este arreglo, es el que establece y marca la igualdad que los ciudadanos de él han adquirido ante la ley. Este es el bien que ha de producir y aquellos los principios que funda la ley de 5 de julio por la que queda abolido todo fuero personal. Entre los muchos males con que los llamados fueros ó mas propiamente las jurisdicciones de privilegio, han afligido á los pueblos, retardando su civilización y hecho de la legislación un caos, resulta ciertamente el haber confundido la administración de justicia con las exenciones civiles, y lo que más es, con las consideraciones sociales.»

Este decreto, como digo, lleva la firma del señor Rivadavia.

Y bien, señor presidente: cuando en la Constituyente se trató de la abolición de los fueros, se hizo discusión sobre el particular, y uno de sus miembros manifestó que se oponía á la abolición de los fueros eclesiásticos. Sobre ese p

to versó la discusión, y sobre lo relativo á los fueros militares solo hubo una insinuación del doctor Gorostiaga, que dijo que no se hacía más que complementar lo que ya había establecido la ley de 7 de julio del año 23. Es, por consiguiente, esto: ha sido abolido, en el orden militar, el privilegio, es decir, la ventaja que tenían los individuos.

Pero lo curioso que ha sucedido después, señor presidente, es que los militares han alegado la abolición del fuero para excluirse de la jurisdicción militar, cuando los perseguían los tribunales militares; y cuando los tribunales civiles, alegaban la existencia del fuero militar, para acogerse á él.

Lo cierto es que, en todos los casos, lo único que se ha buscado es la impunidad; y es precisamente este código el que va á poner término á todas esas indecisiones en que nos encontramos á este respecto, estableciendo claramente á quien corresponde la competencia.

El artículo respectivo de la constitución, dice: «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza»

Si la palabra *fueros* estuviera tomada aquí en el sentido que le ha dado el señor diputado, que se queja y se alarma de la gravedad, de la iniquidad, de la dureza, de la severidad de las leyes militares, indudablemente no cabría, con ese concepto, dentro del artículo de la constitución; pero aquí *fueros* está tomado en plural, y se refiere á los privilegios, como lo indica perfectamente el señor Rivadavia al explicar la misma palabra, en el decreto del año 23.

Entonces pues, queda subsistente lo que decía el señor Rivadavia: los fueros que existen por razón de servicio público, esos no han sido abolidos.

Y este es el caso. La existencia de un ejército es una necesidad para todos los países de la tierra; ninguno, hasta ahora, ha podido vivir sin él. Hay necesidad de tener un ejército, y no se puede tener ejércitos sino como ellos son, es decir, con su propia naturaleza.

Nosotros no podríamos organizar un ejército que no estuviera sometido á

leyes más severas que las que rigen para los ciudadanos; no podríamos organizar un ejército sin disciplina, un ejército donde el subalterno tuviera el derecho de insubordinarse contra su superior. No hay más remedio que aceptarlo tal como existe en todas partes del mundo.

Pero, señor presidente, no es solamente nuestra suprema corte la que ha establecido que los tribunales militares son perfectamente constitucionales, sino que también lo ha establecido la suprema corte de los Estados Unidos.

En el número 639 de las «Decisiones constitucionales», se encuentra lo siguiente: «El congreso tiene el poder de legislar sobre el juicio y castigo de los delitos militares y navales *por consejos de guerra*, de la manera practicada por las naciones civilizadas, y el poder para hacerlo así está dado sin conexión alguna con el poder judicial. Los dos poderes son enteramente independientes uno del otro.»

Esta resolución recayó en el caso de Dynes versus Hower.

De manera que tenemos entonces, señor presidente, que en nuestro país y en los Estados Unidos, de donde hemos tomado nuestras constituciones, está ya establecido que los consejos de guerra tales como se practican en las naciones civilizadas, son perfectamente constitucionales, y que están establecidos por la constitución sin conexión con el poder judicial, es decir, independientemente de él.

Entonces, pues, me extraña mucho que el señor diputado—para principiar á contestar el primer punto que él ha observado—me extraña, decía, que el señor diputado se asombre de que en nuestro país el presidente de la República, en su calidad de comandante en jefe del ejército, sea el encargado por este código militar de aprobar las sentencias de los consejos de guerra.

**Sr. Barroetaveña**—O rever.

**Sr. Alvarez**—Perfectamente, señor: ó rever.

Pero advierto que eso sucede por las ordenanzas actuales; de manera que con la postergación de este código ninguna

ventaja se va á traer sobre ese particular, absolutamente ninguna.

Y no solo no se va á traer ninguna ventaja de ese punto de vista, sino que dudo mucho que el señor diputado pueda encontrar en este congreso, ni en ningún congreso, suficiente número de votos para hacer pasar una cláusula que estableciera que cuando la constitución nacional ha convertido al presidente de la República en comandante en jefe del ejército, no pueda él, que es la más alta autoridad del ejército, aprobar ó rever un proceso, y lo pueda el jefe del estado mayor, el comandante en jefe de un ejército, el jefe de una división, el comandante en jefe de una columna.

**Sr. Barroetaveña**—Por la sencilla razón de que lo ha prohibido terminantemente la constitución.

**Sr. Presidente**—El señor diputado ha sido escuchado con toda atención, y es justo que á, su vez, escuche el señor diputado de la misma manera.

Por otra parte, el reglamento así lo exige, para conservar el orden de la discusión.

**Sr. Alvarez**—No me molesta la interrupción.

En la sentencia de la suprema corte á que se refirió el señor diputado, y á que me he referido, se establece extensamente que el artículo 93 de la constitución, que prohíbe al presidente de la República ejercer facultades judiciales ó rever procesos, está puesto en la parte que se refiere al poder judicial.

Y, además, señor presidente, esto me obligaría á anticiparme á contestar, por otras objeciones que ha hecho el señor diputado.

Es necesario que recordemos que estas disposiciones constitucionales nutes tras, obedecen á precedentes propios á precedentes nuestros.

Tengo aquí á la mano, señor presidente, publicado hace algunos días en un diario, un documento que contiene, casualmente, nuestro primer precedente en esta materia, en la materia de abrogarse el poder ejecutivo facultades judiciales. Es el siguiente:

*«A la junta de comisión de la expedición á las provincias interiores.»*

«RESERVADO.»

«Los sagrados derechos del rey y de la patria han armado el brazo de la justicia, y esta junta ha fulminado sentencia contra los conspiradores de Córdoba, acusados por la notoriedad de sus delitos y condenados por el voto general de todos los buenos. La junta manda que sean arcabuceados don Santiago Liniers, don Juan Gutierrez de la Concha, el Obispo de Córdoba, don Victorino Rodriguez, el coronel Santiago Allende y el oficial real don Joaquin Moreno. En el momento en que todos ó cada uno de ellos sean pillados, sean cuales fuesen las circunstancias, se ejecutará esta resolución, sin dar lugar á minutos que proporcionaren ruegos ó relaciones capaces de comprometer el cumplimiento de esta orden y el honor de V. E. Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema, y una lección para los jefes del Perú, que se avanzan á mil excesos por la esperanza de la impunidad, y es al mismo tiempo la prueba de la utilidad y energía con que llena esa expedición los importantes objetos á que se destina.»—Dios guarde á V. E. muchos años—Buenos Aires, 28 de julio de 1810—*Cornelio Saavedra—Juan José Castelli—Manuel Belgrano—Miguel de Ascuénaga—Domingo Matheu—Juan Larrea—Juan José Paso, secretario—Mariano Moreno, secretario.*»

Este es un decreto de la junta gubernativa de las Provincias Unidas, en que, por resolución administrativa, se mandó fusilar á todas las personas en él enumeradas.

Cuando la constitución ha dicho que el presidente de la República no puede rever procesos; cuando ha dicho que nadie puede ser sacado de sus jueces naturales, ni puede ser juzgado por comisiones especiales, se ha referido á estos antecedentes nuestros, que no podían dejar de estar en el espíritu de los miembros de la Constituyente, porque precisamente ésta ha sido una de las cosas que mayor influencia han tenido en el país.

Y con la venia de la cámara voy á leer, extrayendo este notable párrafo

de la historia de López, algo relativo á la primera comisión especial que se nombró.

Se refiere á los acontecimientos que tuvieron lugar en abril 20 de 1815, y dice: «Fué entonces, cuando inutilizados poco á poco, hombre por hombre, los actores ilustres de los primeros días de Mayo, por los golpes y por el áspero roce de los movimientos tumultuarios que de cuatro años atrás venían descomponiendo el grupo primitivo, comenzaron á introducirse en el claro de las filas figuras mediocres y sombrías, de esas que con el deseo de figurar á favor del desórden, y con una alma dañada por el sentimiento de su propia mediocridad, introducen en el movimiento político la fatal y conocida tendencia de las democracias á expulsar del poder social todo lo que excita su envidia, por lo mismo que brilla y que se eleva sobre el nivel comun.

«Preguntad quiénes fueron en Francia, despues de cada sacudimiento democrático, los sucesores de Mirabeau ó de Guizot; preguntad quiénes fueron los jueces que condenaron á los miembros de la Asamblea general constituyente, en Buenos Aires, y vereis subir al dosel de la justicia nacional hombres ofendidos por la superioridad de los que ahora caían en sus manos por la revuelta; hombres sin carácter propio, movidos por la conveniencia de servir los intereses del momento para ocupar posiciones vacantes; militares de la vieja escuela, algunos honorables por cierto y llenos de antiguos y buenos servicios, pero ofendidos también en su amor propio por las fases nuevas que se había dado á la guerra y á la organización militar, que no podían convencerse de que habían ya llenado su papel, y que empeñarse en prolongarlo era buscar desengaños y contrastes para ellos mismos.

«En semejantes momentos y con semejantes circunstancias, no hay tribunal político alguno que pueda escapar á la iniquidad de sus resoluciones; porque no es tanto en los jueces mismos en quienes debe buscarse el vicio de los actos, cuanto en el conjunto alborotado y enardecido con pasiones bajas y bravías, que opera en derredor de ellos, y

que les impone la obligación de castigar como una cláusula sustancial de su mismo mandato, sin cuyo cumplimiento habrían faltado á su deber y negado la satisfacción que debían haber dado al encono del partido que les transfirió su triste misión.

«Hé ahí el carácter jurídico de las dos comisiones, una *civil* y otra *militar*, que el partido triunfador nombró para que juzgasen á la *Facción de Alvear*.

«Una vez clasificados de facciosos, el crimen estaba ya señalado é impuesto el mandato mismo. La asamblea general constituyente, el directorio, sus ministros, los militares que habían triunfado en Montevideo, los magistrados que habían reorganizado el país, sentado las bases y reformas de su administración civil y militar, á falta de crímenes individuales eran en conjunto *facciosos*: es decir: *gente amotinada que habla usurpado el poder público en fuerza de armas*, según la voz del pueblo»

Esta fué la primera comisión especial que se nombró.

Voy á recordar con una breve lectura una de las innumerables comisiones especiales que funcionaron en nuestro país, una de las que presenta el carácter más común.

«Honorable resolución, autorizando al poder ejecutivo para nombrar comisiones especiales que juzguen breve y sumariamente los delitos de conspiración, asesinato y robo.

«Mendoza, julio 16 de 1835,—Al excelentísimo señor gobernador y capitán general de la provincia.

«La honorable sala de representantes de la provincia, habiendo tomado en consideración la nota del poder ejecutivo fecha 13 del corriente, en que solicita se arbitren los medios de contener los delitos de robo, asesinato y conspiración, ha acordado y decreta lo siguiente:

«Artículo 1º Facúltase ampliamente al poder ejecutivo de la provincia, para que nombre comisiones especiales que juzguen breve y sumariamente los crímenes de conspiración, asesinato y robo, aplicando á los perpetradores las penas designadas por las leyes.

Art. 2º La facultad concedida en el



artículo anterior durará el término de un año, al fin del cual ó antes si lo considera necesario el ejecutivo, dará cuenta á la honorable sala de sus determinaciones».

Bien, señor presidente: quería leer este documento porque él muestra acabadamente qué es lo que toda la vida se ha entendido entre nosotros por comisiones especiales, por jueces no naturales ó por atribuciones judiciales del poder ejecutivo.

Ahora no existen estas cosas; nosotros, los de la nueva generación, solo podemos encontrarlas en la historia; y de aquí resulta que cuando leemos la constitución y hallamos estas palabras: «jueces especiales, comisiones especiales, jueces no naturales», nos causa extrañeza, pareciéndonos que todo lo que no sea exactamente igual á lo que hoy existe en el orden civil es lo que la constitución proscribiera.

No, señor presidente. Los tribunales militares han existido en la República Argentina, ántes durante y después de regir la constitución actual, sin que nunca, sino con el propósito de salvar á algún afligido, se haya dicho que son tribunales especiales y *ad hoc*.

Los tribunales especiales á que se refiere la constitución, son innegablemente los de la clase de que he dado noticia con esta lectura.

El señor diputado me parece que no está en lo cierto cuando establece que estos tribunales son tribunales *ex post facto*.

La constitución norteamericana trae esta cláusula de nuestra constitución,—aunque no en la misma forma, conteniendo exactamente su esencia. Dice: no se pueden dictar leyes *ex post facto*. Pero por ley *ex post facto* se entiende, como lo explican todos los tratadistas, aquellas leyes que tienen efecto retroactivo; y aun siendo así, algunos autores entienden que solo están prohibidas en el orden penal, y no en el orden civil. Bien; en el orden penal debe entenderse, por esta prohibición de dictar leyes retroactivas, que ninguna ley debe aplicarse á hechos anteriores á su sanción.... Y desde este punto de vista el señor diputado puede estar tranquilo,

porque este código no se va á aplicar sino por hechos que tengan lugar después de su promulgación. No tiene nada de retroactivo, absolutamente.

Estos tribunales *ex post facto*, que tienen tan preocupado al señor diputado, han existido siempre en la República. Así mismo existen en casi todas las naciones civilizadas de la tierra: en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Chile, y, en fin, en todas las repúblicas sudamericanas.

Y por esta circunstancia de que el señor diputado se ha preocupado mucho, de cuidar lo que concierne al interés del acusado militar, ha olvidado cuál es el objeto primordial de la institución militar.

Señor presidente: los ejércitos no son establecidos en beneficio de sus miembros, sino en beneficio de la nación; y, con tal fin, lo primero que debe hacerse es adoptar todas aquellas medidas que aseguren, mediante sus servicios, la satisfacción de las necesidades de la nación. Lo primero de todo para un ejército, no consiste en las preocupaciones que pueda tener cualquier hombre que no sea de sus filas, preocupaciones respecto de su bienestar, de cómo se administrará en él la justicia, etc. Esto es meramente secundario en un ejército. Lo esencial es que tenga buena organización, y los medios de triunfar, los recursos necesarios para ser eficaz á los fines de su institución.

Nosotros no podemos sacrificar el ejército distrayendo del servicio la mitad, una tercera parte ó cualquier número de oficiales, para inmovilizarlos en esos tribunales permanentes á que el señor diputado se refería y que había establecido la comisión anterior.

No se puede hacer esto por varias consideraciones. La comisión anterior había tomado esa disposición de la República Francesa, que tiene efectivamente tribunales permanentes; pero al hacerlo no reparó que la situación topográfica, que la población, que la administración de una y otra república son completamente diversas.

En Francia hay cuerpos de ejército que tienen su cuartel general, su distrito, su sección, y que permanecen todo el año en el mismo punto.

Entre nosotros no hay ningún distrito militar, propiamente dicho. El ejército está donde lo requieren las necesidades del servicio.

La comisión anterior, copiando la ley francesa, había establecido que los tribunales militares serían permanentes, y que harían en ellos de fiscales los mismos de los juzgados de sección.

Esto no pudo aceptarlo la comisión revisora, porque considera absurdo confiar á simples particulares la defensa de la disciplina del ejército.

Es extraño que la primera comisión lo haya aceptado, cuando ella misma, al establecer el fundamento de los tribunales militares, decía que la justicia militar no puede estar entregada á los jueces civiles, porque consiste en particularidades, en peculiaridades esencialmente propias de la carrera militar, que no las puede comprender nadie, sino un militar.

Y citando, dice: Hay casos de delitos que no tienen ninguna gravedad en el orden común de la vida, pero que pueden destruir un ejército, pueden causar trastornos tremendos. Eso no lo conoce sino el que es militar, y es la razón por la cual solo los militares pueden administrar la justicia militar, y ninguna nación de la tierra los tiene establecidos de otra manera, exceptuando la Inglaterra que los estableció por vía de ensayo durante varios años, y tuvo que abandonarlos porque no le daban resultado satisfactorio. Y si la Inglaterra,—donde sus hombres son incomparablemente mas sensatos que todos los sud-americanos,—no pudo mantenerlos, ¿queremos nosotros copiar lo que allí no dió resultado?

La comisión revisora no ha podido aceptar los tribunales permanentes por considerar inaceptable que el acusador sea un paisano, diremos así, y porque, no existiendo circunscripciones militares, sería necesario crearlas.

Esas circunscripciones no son reclamadas por nuestras necesidades. Podría suceder que hubiese circunscripciones donde no hubiese ejército, porque el poder ejecutivo no está obligado á mantenerlo en ellas, á no ser que lo hiciese para que tuvieran trabajo esos tribunales!

Las necesidades del servicio obligan á

trasladar el ejército de un punto á otro; y debe recordarse que, como dice la misma comisión, el ejército debe ser como un estado en marcha: debe llevar lo necesario para su subsistencia y para corregir todos los defectos ó inconvenientes que le sobrevengan.

Es por eso que quisiéramos organizar la justicia de tal manera, que, bajo la forma de jurado, el acusado encuentre las mayores garantías, y al mismo tiempo, bajo la forma de tribunal ocasional, se facilite los medios para que el ejército no distraiga personal inútilmente.

No podemos tampoco aceptar la inmovilización de jefes y oficiales que, según el señor diputado indica, deberían quedar inamovibles en su puesto, porque, como ya insinúe, si esa regla se hubiera aceptado y se hubieran nombrado los tribunales establecidos por el código proyectado primitivamente, habría sido necesario inmovilizar de ochenta á ciento y tantos jefes y oficiales, á los cuales el poder ejecutivo no hubiera podido mandar de un punto á otro, ni aún en las urgencias mayores.

La primera condición de un ejército es que sus miembros estén habilitados en cualquier momento para todos los servicios que les sean requeridos. Eso no se realiza con los tribunales permanentes, y sí con el sistema establecido por la comisión revisora en este proyecto, que tiene todas las ventajas de lo que rije actualmente y todas las del jurado, hasta donde es posible tenerlas en el orden militar.

**Sr. Presidente**—Si el señor diputado se encuentra fatigado....

**Sr. Alvarez**—Un poco, y como comprendo que la cámara también debe estarlo, aceptaría un cuarto intermedio.

**Sr. Presidente**—Invito á la cámara á pasar á cuarto intermedio.

—Así se hace.

—Vueltos poco después al recinto los señores diputados, se resuelve pasar nuevamente á cuarto intermedio, por no encontrarse la cámara en *quorum*.

—Son las 5 y 15 p. m.